

ENTREVISTA

Joaquín Garrigues Walker: «Hay que tratar de integrar a esas dos Españas que hasta la fecha sólo se ponen de acuerdo para excluirse»

El desarrollo del capitalismo español ha creado las bases de una nueva élite política de derechas. Joaquín Garrigues Walker es, quizá, el mejor exponente público de la alta burguesía. Por su inteligencia, lucidez y habilidad está llamado a jugar un importante papel en el futuro español. Y en cierto modo, con bastante discreción, lo está jugando ya.

En un momento en que el país clama por encontrar interlocutores válidos, tanto de la derecha como de la izquierda, este joven político representa los intereses de una destacada fracción de la clase social a la que pertenece. Es interesante constatar cómo, en época de crisis, relevantes personalidades asumen tareas políticas por encima de los partidos tradicionales, que no saben reflejar de un modo real los objetivos del sector social teóricamente representado. Esta necesidad objetiva les conduce, en corto plazo, a plantearse la creación de un instrumento organizativo que viabilice en la práctica sus propuestas. En esta labor se encuentra ahora Joaquín Garrigues Walker. Trabajo nada fácil, porque el empresario de nuestro país, al que pretende organizar, está políticamente muy atomizado.

Las fuerzas sociales reales del país tienen una deuda pendiente con este representante de la derecha democrática. Y consiste en que su actitud es clarificadora. Con él no hay ceremonia de la confusión posible. No hay más que echar una ojeada al panorama político español, donde sur-

gen las izquierdas más insospechadas y los demócratas de la hora veinticinco, para valorar la posición de este líder. Su propia autodefinición de derechas, de anticomunista ideológico, es mucho más rentable al país que el carnaval de máscaras políticas que padecemos.

EL EUROPEO.—La reorganización del Gabinete Arias Navarro ha motivado una serie de comentarios de carácter triunfalista sobre la pretendida derrota de Girón —a través de la salida de Utrera Molina y Ruiz Jarabo— y la consiguiente consolidación del espíritu de febrero. ¿Se suma usted a esta exaltación aperturista o, por el contrario, opina que es una batalla más de la guerra «intramuros» que aún no ha conocido su desenlace definitivo?

JOAQUÍN GARRIGUES.—Yo me sumo a los que opinan que esta es una batalla más de la guerra «a intramuros» del Régimen; una batalla entre la línea del presidente y la línea «azul». En esta batalla concreta el derrotado parece haber sido Girón, como en otras anteriores lo fue el propio presidente. Pienso, de todas formas, que sería un error creer que Girón, y lo que él representa, ha perdido la guerra. Yo, particularmente, pienso que a medio plazo la línea de Girón en nuestro país no tiene posibilidades de éxito. Pero en la política de todos los días, en el corto plazo, habrá que contar con él. Nos guste o no, Girón está ahí, es decir, está vivo, lo que a su vez quiere decir que es un dato de la realidad, y en política hay que contar con la realidad y olvidarse de los esquemas de laboratorio.

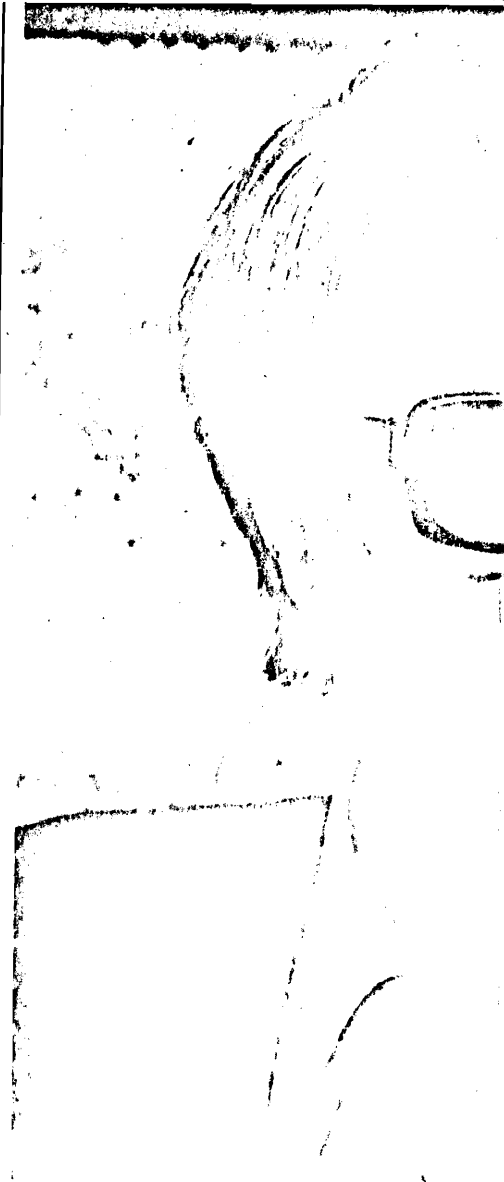
Por otra parte, en un futuro democrático, en el país habrá que integrar a hombres como él dentro del sistema político, porque si los excluimos para que entren los que están ahora marginados, estaremos implantando un sistema de otro signo, pero igualmente antidemocrático. El esfuerzo que tenemos que hacer todos los españoles, de una vez y por todas en nuestra historia, es el de integrar a esas dos Españas que hasta la fecha sólo se ponen de acuerdo para excluirse. Y desde esta perspectiva, estas luchas a intramuros del Régimen son en gran parte estériles, porque a quienes tenemos que integrar en esta hora son a los que han estado marginados durante siglos del juego político del país.

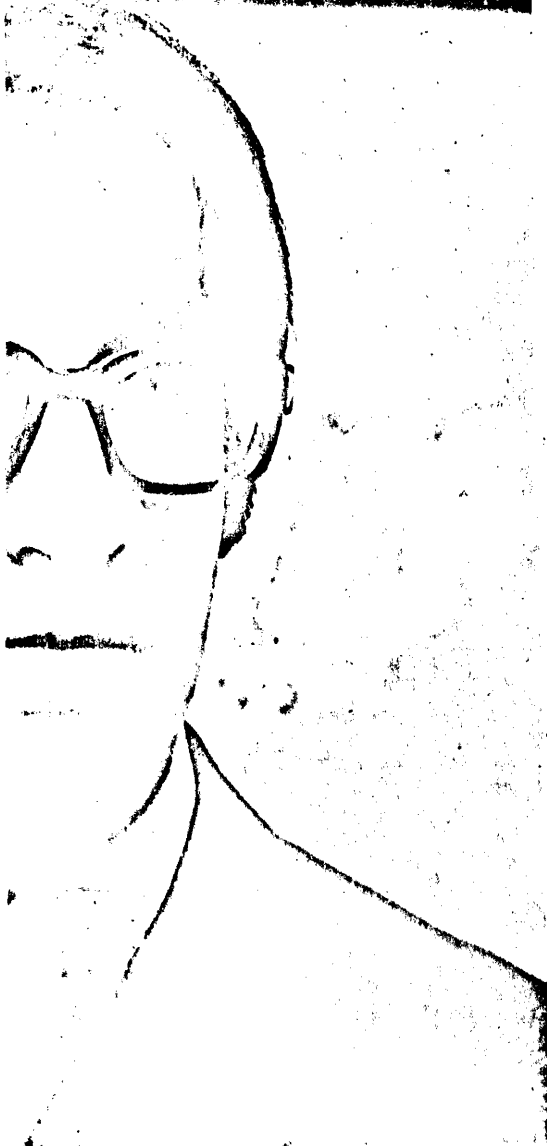
E. E.—Existen en la actual situación política española distintos tipos de plataformas unitarias que pretenden dar una alternativa a la crisis abierta por el final de un período excepcional de la historia española. Es indudable que, hoy por hoy, están incluyéndose de un modo bastante acusado. Ahi

esta, por ejemplo, la reciente reunión de Estrasburgo, en la que han participado dirigentes de la Comunidad Económica Europea con representantes de una de estas estructuras unitarias. Casi todos los nombres políticos de la oposición democrática se han pronunciado en pro o en contra de cada una de estas alianzas. Y decimos casi, porque la excepción más destacada es Joaquín Garrigues, quien aún no ha dicho esta «conferencia» o esta «junta» es mía.

J. G.—El problema de todas las dictaduras, sin excepción, es el de que, por bien que lo hagan, tienen siempre un plazo de tiempo limitado, al término del cual se plantean otra vez los problemas que pretendieron resolverse con la implantación de la dictadura.

La dictadura como forma de Gobierno es una especie de nirvana que puede ser una solución eficaz por un breve plazo de tiempo para resolver una situación de emergencia. Pero un pueblo que pretenda ser civilizado no puede renunciar a gobernarse a sí mismo, y los propios países comunistas,





tarde o temprano, acabarán autogobernándose por muchas que parezcan ser las ventajas que resulten del orden público impuesto por la fuerza y las cotas de desarrollo material que se alcancen durante esa etapa. La condición humana exige la libertad, y todos los pueblos han sacrificado por ella otros valores de segundo rango.

Durante estos últimos años se han conseguido en el terreno material en nuestro país cosas importantes, pero a un coste que, si no resolvemos pacíficamente el tránsito hacia otra forma de Gobierno, resultará estéril. En busca de esa solución, los españoles más conscientes de uno y otro signo se mueven hoy tratando de enlazar el pasado con el futuro sin un trauma catastrófico. Y de ahí que se ofrezcan alternativas y plataformas de convergencia de todo tipo para tratar de cubrir el vacío político que sin duda se producirá a la muerte de Franco. Tanto la «conferencia» como la «junta» responden al deseo de asegurar ese tránsito hacia otras formas de convivencia de carácter democrático, es decir, donde el poder esté más repartido y más

compartido. A mí me parece que todos esos intentos son válidos y legítimos, sobre todo cuando la otra vía, la de la evolución del Régimen, parece cada vez más difícil y problemática.

Si yo personalmente no me he pronunciado en favor o en contra de estas alianzas es por entender que esas plataformas serán válidas en tanto en cuanto comprometan a grupos políticos organizados, es decir, aquellos que sean representativos de las tendencias ideológicas del país y de las clases sociales. A mí me parece que a título personal participar en estas «alianzas» sin contar con el apoyo o respaldo de organizaciones políticas o de las clases sociales es una experiencia relativamente poco eficaz tanto para uno mismo como por lo que se aporta a esas alianzas.

E. E.—El Presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, ha manifestado que en el país caben todas las fuerzas políticas menos los comunistas y los separatistas oficialmente como «separatistas». Dos exclusiones que nos llevan de lleno a dos importantes problemas. Uno referente al mundo obrero y el otro a la especificidad histórica de Cataluña, Euzkadi y País Gallego. Sobre estas discriminaciones y su problemática de raíz ¿qué opinión tiene?

J. G.—En efecto, el Presidente ha dicho que en el país caben todas las fuerzas políticas menos el comunismo y los separatismos. Pero en la práctica han quedado excluidos hombres como Areilza, Fraga, Pío Cabanillas, Fernández Ordóñez y algunos tácticos entre otros. Si nombres como estos quedan excluidos o se ven forzados a auto-excluirse —que para el caso es lo mismo— cabe cuestionarse el alcance de las exclusiones presidenciales. A su vez, hombres como Dionisio Ridruejo y Ruiz Jiménez ni siquiera se plantean el tema de participar. Gil Robles por su parte re-descubre —ante el asombro general y dando muestras de su habilidad política— la Ley de Asociaciones del 64. A Felipe González y a Pablo Castellanos, por un lado, y a Enrique Tierno y a Raúl Morodo, por otro, ¿se les puede pedir que se asocien en los términos del Estatuto? Pues bien, cualquiera de ellos en los países de Europa Occidental serían los líderes indiscutibles de los partidos políticos homologables con los que ellos representan aquí.

No. Yo pienso que con independencia de las palabras del presidente la realidad es muy otra. Con el Estatuto de Asociaciones en la mano quedan excluidos de hecho muchos más de los que con sus palabras excluye el presidente del Gobierno. Y esto es así porque la autoridad del presidente en este tema está condicionada por la actitud inequívoca del Régimen en este punto a lo largo de los años, actitud que reafirman grupos importantes del actual Régimen político.

En cuanto al comunismo el tema es más complejo. Su exclusión sería dialécticamente aceptable si con el mismo énfasis se excluyesen a los partidos fascistas. En otro caso los argumentos para su exclusión quiebran por la base. Se dirá que en el caso del partido comunista existen además argumentos históricos y de todo tipo que justifican y aconsejan esta decisión. Todos estos argumentos, en mi criterio, tienen su peso. Pero, ¿qué hacemos con los comu-



nistas? ¿los matamos a todos? ¿los mantenemos en la clandestinidad actuando irresponsablemente en la vida pública o los comprometemos en la legalidad para que colaboren en soluciones solidarias?

Dicho esto yo comprendo que el tema es complejo y delicado. Para amplios sectores de la burguesía española el tema del comunismo no es negociable. Según se dice, el Ejército tampoco aceptaría la presencia legalizada del partido comunista. Estas actitudes, en mi opinión, son en gran parte emocionales y en consecuencia irracionales pero son también un dato de la realidad del problema. Y en ello radica la dificultad de encontrar una solución política. Muchos burgueses, muchos católicos y un amplio sector del Ejército no quieren ni oír hablar del comunismo. Y a su vez el partido comunista existe. Es también un dato de la realidad sociológica del país. ¿Qué hacemos? Yo reconozco que no tengo la solución.

El problema regional no es por su parte menos complejo. Ya se admite por los hombres del propio Régimen que el país exige un grado creciente de descentralización administrativa. El centralismo a ultranza que hemos mantenido durante tantos años comporta más inconvenientes que ventajas. También se acepta lo que se llama el hecho diferencial de las regiones, las costumbres, el folklore, los idiomas y las diferencias jurídicas que resultan de la tradición de siglos. Se habla de todo esto y en las regiones que usted menciona se plantea además el tema de la autonomía política. Y aquí precisamente empieza el problema. ¿Hasta dónde llega la autonomía? ¿De qué grado de autonomía política se habla? ¿Es el federalismo una fórmula aceptable?

Yo tampoco tengo las respuestas a estas preguntas pero sí digo que no se trata sólo de descentralización administrativa. Y aún más. La descentralización administrativa exige ya por sí misma un cierto grado de autonomía política. El tema regional es un tema fundamentalmente político y todo tema político exige el pacto y la negociación.

La prueba es que después de tantos años con el eslogan de la unidad, volvemos a tener que plantearnos el tema de la integración regional desde un enfoque político. Y tener que hacerlo así no implica, en modo alguno, que con ello quiebre la unidad política del país. Por el contrario, de ese pacto la unidad saldría fortalecida.—F. L. A. (Fotos: CUENCA.)